LA MEDIACIÓN DE CONSUMO Y EL PROCESO

Por

VICENTE PÉREZ DAUDÍ
Profesor Titular de Derecho Procesal. Acreditado a Catedrático
Universitat de Barcelona

perezdaudi@ub.edu

Revista General de Derecho Procesal 48 (2019)

RESUMEN.: En este trabajo analizo la relación entre la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. En primer lugar, analizo los mecanismos de protección del consumidor a través de los ADR, distinguiendo entre los ADR vinculantes y no vinculantes y su relación con la ejecución de los mismos. A continuación, desarrollo la relación entre la mediación de consumo y el proceso judicial a través de la denuncia de la existencia de un acuerdo de acudir a un ADR; las actividades previas al proceso, como las diligencias preliminares y las medidas cautelares, y el efecto que tiene el inicio de un procedimiento de un ADR; y cómo afecta al proceso judicial pendiente.

PALABRAS CLAVE: ADR, mediación, arbitraje, conciliación, consumidores, proceso judicial.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La protección del consumidor en los adr en materia de consumo. 2.1. Las normas imperativas de protección del consumidor y los adr. 2.2. El control de las normas imperativas en los adr. 2.2.1. El control de las normas imperativas en los adr vinculantes. 2.2.2. El control de las normas imperativas en los adr no vinculantes. 2.2.3. La influencia de la impugnación del adr en su ejecución. 3. La relación entre la mediación de consumo y el proceso judicial. 3.1. Las materias que deben ser objeto de regulación. 3.2. La denuncia procesal de la existencia de un acuerdo de acudir a un adr. 3.3. Los adr y las actividades previas al proceso judicial. 3.4. El inicio de un adr y el proceso judicial pendiente. 4. Bibliografía

ABSTRACT: In this paper I analyze the relationship between Law 7/2017, of November 2, by which Directive 2013/11 / EU, of the European Parliament and of the Council, of May 21, 2013, is incorporated into the Spanish legal system. to the alternative resolution of consumer litigation. First, I analyze consumer protection mechanisms through ADRs, distinguishing between binding and non-binding ADRs and their relation to their execution. Next, I developed the relationship between consumer mediation and the judicial process by denouncing the existence of an agreement to resort to an ADR; pre-trial activities, such as preliminary proceedings and precautionary measures, and the effect of initiating an ADR procedure; and how it affects the pending legal process.

KEYWORDS: ADR, mediation, arbitration, conciliation, consumers, judicial process.

1. INTRODUCCIÓN

El legislador español ha realizado la trasposición de la directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) número 2006/2004 y la Directiva 2009/22/C (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) a través de la aprobación de la ley 7/2017, de 2 de noviembre.

La directiva 2013/11/UE constata que la resolución alternativa de litigios no está desarrollada de manera suficiente y coherente en toda la Unión (Considerando 5). Por este motivo pretende crear una “infraestructura para la resolución alternativa de litigios en materia de consumo que funcione correctamente y con un marco para la resolución de litigios en línea en materia de consumo derivados de transacciones en línea” (considerando 11 de la Directiva). Para ello se basa en “los procedimientos de resolución alternativa existentes en los Estados miembros y en el respeto de sus respectivas tradiciones jurídicas” (considerando 15 de la Directiva).

El consumo es una de las materias en las que nos hallamos ante la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas que la hayan incluido como tal en sus Estatutos, como Catalunya y el País Vasco, y la competencia del Estado. En Catalunya la Generalitat afirma que realizó la trasposición de la Directiva 2013/11/UE a través del Decreto 98/2014, de 8 de julio, del Departamento de Empresa y Empleo, sobre procedimiento de mediación en las relaciones de consumo. Resulta sorprendente que se hiciese a través de un Decreto del Departamento de Empresa y Empleo, la exposición de motivos del Decreto afirma que “tiene también como finalidad aplicar y ejecutar en el ordenamiento jurídico catalán la Directiva mencionada en lo que hace referencia a la mediación, vista la competencia exclusiva de la Generalidad de Catalunya en la materia”.

Al margen de esta afirmación genérica, en el texto no se aprecia la trasposición de la directiva que se aplica “a los procedimientos de resolución extrajudicial de litigios nacionales y transfronterizos relativos a obligaciones contractuales derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios entre un comerciante establecido en la Unión y un consumidor residente en la Unión, mediante la intervención de una entidad de resolución alternativa de litigios, que propone o impone una solución o que reúne a las partes con el fin de facilitar una solución amistosa”. El Decreto 98/2014 de 8 de julio, sobre el procedimiento de mediación en las relaciones de consumo desarrolla

reglamentariamente el artículo 132.1 de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de consumo de Catalunya, pero no transpone la directiva comunitaria 2013/11/UE¹.

De forma genérica considero que una de las críticas que se debe realizar tanto a la directiva como a la trasposición legislativa realizada es que la ley no ha tenido en cuenta las diferentes reclamaciones que se pueden plantear en defensa de los intereses de los consumidores ya que no es lo mismo una relacionada con la devolución de un producto de escaso valor que una reclamación por la existencia de una cláusula abusiva en un contrato celebrado entre un consumidor y una entidad bancaria. La tipología del conflicto es distinta, al igual que los mecanismos de resolución.

En este trabajo me voy a centrar en los siguientes aspectos de la trasposición:

- La protección de consumidor en los adr.
- La relación entre adr y proceso judicial.

2. LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN LOS ADR EN MATERIA DE CONSUMO

2.1. Las normas imperativas de protección del consumidor y los adr

El artículo 11 de la Directiva 2013/11/UE prevé que “los Estados miembros velarán por que en los procedimientos de resolución alternativa que tengan por objeto resolver un litigio mediante la imposición de una solución al consumidor...la solución impuesta no podrá privar al consumidor de la protección que le proporcionen aquellas disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley del Estado miembro en que el consumidor y el comerciante tengan su residencia habitual”. En caso de tenerla en Estados distintos el apartado B se remite a la ley del Estado miembro en que el consumidor tenga su residencia habitual.

El apartado 44 de la directiva indica que “la solución impuesta no debe dar lugar a que el consumidor se vea privado de la protección ofrecida por disposiciones que no puedan excluirse mediante un acuerdo con arreglo a la legislación del Estado miembro en que el consumidor y el comerciante tengan su residencia habitual”.

El legislador español traspone esta previsión en el artículo 16 de la ley 7/2017, de 2 de noviembre, distinguiendo si el litigio tiene carácter nacional o transfronterizo. En el primer caso el párrafo a del apartado 1 prevé que “la solución impuesta por la entidad de resolución alternativa no podrá privar al consumidor de la protección que le proporcionen

---

¹ Sobre el mismo ver el comentario de VILALTA NICUESA, “las reclamaciones de consumo y el Sistema de mediación institucional (análisis del Decreto 98/2014, de 8 de julio , sobre el procedimiento de mediación en las relaciones de consumo, a la luz de la normativa comunitaria y estatal)”, en *InDret*, 4/2014, versión digital.

aquellas normas imperativas o que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la legislación española”.

El párrafo b del apartado 1 del artículo 16 de la ley 772017 regula el litigio transfronterizo, remitiéndose a las normas imperativas que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la legislación aplicable al contrato de consumo determinada.

Debo advertir que esta regulación la realiza el legislador para aquellos casos en que la entidad de resolución alternativa pueda imponer la solución. En el derecho español actualmente sólo se plantea esta posibilidad en el ámbito del arbitraje de consumo. A sensu contrario, no existe previsión alguna en los procedimientos con resultado no vinculante. Es decir, existe una laguna legal en los procedimientos de mediación y conciliación.

Además, el legislador no hace referencia alguna a las normas imperativas de carácter comunitario. Debo recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la normativa europea de protección del consumidor integra el orden público comunitario². Y este tiene carácter imperativo en todos los Estados de la Unión Europea, debiendo ser aplicado por los Tribunales estatales, que actúan como juez comunitario, incluso cuando entren en contradicción con normas de derecho nacional.

La regulación expuesta tampoco regula ni los mecanismos de control de la aplicación de las normas imperativas en materia de consumo ni los efectos de su vulneración.

En mi opinión el efecto es, indudablemente, la nulidad del acuerdo que pone fin al procedimiento de ADR. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre esta consecuencia cuando se vulneran las normas de orden público comunitario, y especialmente en los casos en que se ha planteado la protección de los consumidores³. Esta doctrina jurisprudencial es plenamente aplicable a la resolución de los conflictos con consumidores. La diferencia consiste en el control que se realiza de la aplicación de las normas imperativas.

Cuando la resolución del conflicto se realiza a través de un proceso judicial ante los tribunales estatales las normas procesales aplicables ya permiten que el Órgano Jurisdiccional aplique de oficio las normas imperativas que protegen al consumidor. Además, en aquellos casos en los que los Tribunales han tenido dudas porque la norma procesal nacional no le ha permitido aplicar la regulación europea de protección del consumidor han planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como consecuencia de ellas el Tribunal europeo ha dictado numerosas

---

² Ver ampliamente el análisis que realizo en *La protección procesal del consumidor y el orden público comunitario*, editorial Atelier, Barcelona, 2018.

³ Ver el desarrollo jurisprudencial en *La protección procesal del consumidor...*, cit.

resoluciones judiciales europeas primando la aplicación de la normativa comunitaria sobre la norma procesal interna que lo impedía.

2.2. El control de las normas imperativas en los adr

La cuestión que me planteo en este apartado es su aplicación en el ámbito de los sistemas de resolución alternativa de litigios en materia de consumo. La ley 7/2017 no regula nada específicamente, por lo que deberemos acudir a la regulación general de cada uno de los medios alternativos de resolución de conflictos para hallar para determinar el sistema de control previsto.

La ley 7/2017 distingue entre procedimiento con resultado vinculante y no vinculante. Los apartados k y l del artículo 2 delimitan el ámbito de cada uno de ellos.

El apartado K del artículo 2 de la ley 7/2017 define el procedimiento con resultado vinculante el “que finaliza con imposición a cualquiera de las partes de la solución adoptada, conlleve o no renuncia a la vía judicial”. En éste debemos incluir al arbitraje de consumo, que finaliza con un laudo arbitral que se impone a las partes.

El apartado L del artículo 2 define el procedimiento con resultado no vinculante como el “que finaliza con un acuerdo alcanzado entre las partes, adoptado por sí mismas o mediante la intervención de un tercero, o que termina con una propuesta de solución, con independencia de que las partes posteriormente puedan otorgar a su acuerdo carácter vinculante o comprometerse a aceptar la proposición efectuada por la persona encargada de la solución del litigio”. En éste se incluiría la mediación de consumo y la conciliación.

2.2.1. El control de las normas imperativas en los adr vinculantes

La ley 7/2017 no realiza regulación alguna sobre el arbitraje, la mediación o la conciliación. Ello nos obliga a acudir a la regulación específica de cada una de las instituciones para analizar los mecanismos para analizar y, en su caso, corregir la vulneración de las normas imperativas y concretamente del orden público comunitario.

En el caso del arbitraje el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, regula el Sistema Arbitral de Consumo. El artículo 33.1 prevé que “el arbitraje de consumo de decidirá en equidad, salvo que las partes opten expresamente por la decisión en derecho”. Sorprende que siendo una materia en la que el legislador ha dictado normas de carácter imperativo para la protección del consumidor el legislador no hace referencia en ningún momento al respeto de las normas aplicables y que integran el concepto de orden público.

El legislador tampoco regula el mecanismo para subsanar la vulneración de una norma de orden público en el arbitraje de consumo. Ante esta laguna legal hay que acudir a la regulación de la ley de Arbitraje, tal como prevé el artículo 2.

La ley de Arbitraje regula en los artículos 40 y siguientes la acción de anulación y de revisión del laudo, siendo uno de los motivos “que el laudo es contrario al orden público”. En el caso concreto planteado si el laudo arbitral de consumo vulnera normas imperativas de protección del consumidor, éste podrá interponer la acción de anulación del laudo en el plazo de dos meses alegando como motivo que es contrario al orden público.

Es cierto que el concepto de orden público es difuso y controvertido, pero en el caso concreto de las normas europeas de protección del consumidor el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que integran el orden público comunitario⁴. Por ello la vulneración de estas por el laudo arbitral debe ser denunciada a través de este motivo.

El procedimiento de la acción de anulación se regula en los artículos 44 y siguientes de la Ley de Arbitraje. El apartado 1 del artículo 45 regula la relación entre la acción de anulación del laudo y su ejecución. la regla general es que es ejecutable, pero el ejecutado puede solicitar la suspensión de la ejecución si ofrece caución por el valor de la condena más los daños y perjuicios que pudieren derivarse de la demora en la ejecución del laudo⁵.

2.2.2. El control de las normas imperativas en los adr no vinculantes

La vulneración de la aplicación de las normas imperativas también se puede producir en un acuerdo de mediación en consumo. En este caso la ley 7/2017 tampoco regula ningún mecanismo para subsanarlo. De nuevo nos hallamos ante una laguna legal que obliga a acudir a la regulación general de los acuerdos de mediación. En este contexto una de las novedades de esta ley es que la disposición final séptima suprime el párrafo d del apartado 2 del artículo 2 de la ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Recuerdo que el precepto derogado excluía la aplicación de la ley

---

⁴ Ver por todas la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2017.

⁵ Sobre esta previsión desde una perspectiva crítica al considerar que se discrimina la ejecución del laudo arbitral del de las sentencias ver ampliamente FRANCO ARIAS (en “artículo 44 y 45: la ejecución del laudo y particularmente la ejecución provisional según la nueva ley de arbitraje del 2003”, en Anuario de Justicia Alternativa, número 5/2004, febrero 2004). También desde esta perspectiva crítica analizan el artículo 45 de la Ley de Arbitraje PARDO IRANZO (EN “Valoración crítica de la reforma del proceso de ejecución del laudo arbitral”, en Revista General de Derecho Procesal, 26, 2012) y RIPOLL CARULLA (en “la suspensión del laudo: estudio del artículo 45 LA, en Justicia, 2013-1, pp. 373 y ss).

de mediación en asuntos civiles y mercantiles a la mediación de consumo. La consecuencia es que actualmente sí que se aplica a este tipo de solución de conflictos, pero el inconveniente es que la ley 5/2012 también presenta serios problemas en la regulación de la relación entre la mediación y el proceso.

El artículo 23.4 de la Ley de Mediación prevé que “contra lo convenido en el acuerdo de mediación sólo podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos”. Sin embargo, no regula el mecanismo procesal para realizar la impugnación. Ello obligará a iniciar un proceso declarativo en el que se ejercite la pretensión de nulidad por las causas que invalidan los contratos, entre las que se incluyen la vulneración de normas imperativas o que integren el orden público, aplicando las reglas generales de la LEC. De forma general la competencia objetiva será del Juzgado de Primera Instancia (artículos 85 LOPJ y 45 LEC). La competencia territorial vendrá determinada por la pretensión ejercitada: el artículo 52.3 LEC prevé que si se solicita la nulidad del acuerdo vendrá determinada por el domicilio del consumidor o del tribunal correspondiente conforme a los artículos 50 y 51 de la LEC (domicilio del demandado persona física o jurídica); y si se ejercita alguna de las acciones previstas en el inciso 14ª del artículo 52.2 LEC vendrá determinada por el fuero previsto en el mismo. El procedimiento por el que se tramitará se determinará en función de la cuantía, ya que no existe una previsión específica en la LEC #(\$000142,000143,)#.

La última de las opciones sería la conciliación, aunque no está prevista específicamente en el ámbito de consumidores, se regula de forma general en los artículos 139 y ss. de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria. La acción de nulidad está prevista en el artículo 148 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y prevé que debe interponerse en el plazo de quince días desde que se celebró la conciliación ante el tribunal competente y se sustanciará por los trámites del juicio que corresponda por materia o por cuantía (apartado 2). Para evitar los inconvenientes de que se impugne el acuerdo de conciliación y su posible ejecución el artículo 148.3 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria regula como efecto de la acción de impugnación la suspensión de la ejecución de lo convenido en el acto de conciliación.

2.2.3. La influencia de la impugnación del adr en su ejecución

Un problema que se pueden plantear en todos los supuestos en que se impugne un acuerdo al que se ha llegado a través de un ADR es precisamente su relación con el proceso de ejecución. El artículo 517.2 LEC prevé que tendrán aparejada la ejecución “los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la ley de Mediación en

asuntos civiles y mercantiles”. Por otro lado, la acción de nulidad del acuerdo de mediación no implica la suspensión de la ejecución.

Ante esta situación la opción legislativa hubiera podido ser la suspensión automática del carácter ejecutivo del acuerdo impugnado, como realiza el artículo 148.3 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para el acuerdo de conciliación, o previa solicitud de parte obligando a constituir caución, tal como prevé el artículo 45.1 de la Ley de Arbitraje. Sin embargo, la ley de mediación no prevé nada al respecto. Una primera opción que tiene el demandante es solicitar como medida cautelar la suspensión de la ejecución del acuerdo. El régimen legal aplicable sería la regulación de las medidas cautelares prevista en los artículos 721 y siguientes de la LEC, lo que obliga a acreditar el *fumus boni iuris*, el *Periculum in mora* y ofrecer caución.

A priori, la principal dificultad que tendrá el solicitante es que el notario, al elevar a público el acuerdo impugnado, ha realizado un control de legalidad por lo que el acuerdo será válido y conforme al derecho aplicable. Es decir, trasladando la terminología de las medidas cautelares existe un *fumus boni iuris* de que el acuerdo es válido. El solicitante deberá acreditar que es contrario al orden público o a las normas imperativas, lo que implica una gran dificultad por ese control de legalidad que ya se ha realizado.

En el caso en que el acuerdo no se haya elevado a escritura pública ese control previo no se habrá realizado, pero tampoco tendrá carácter ejecutivo. Para lograr su eficacia la parte que lo pretenda deberá iniciar un proceso declarativo en el que el se podrá alegar su nulidad. En este caso la medida cautelar de suspensión no se podrá adoptar ya que no será idónea al no tener carácter ejecutivo.

Otra opción que se pueda plantear es que haya iniciado un proceso declarativo de nulidad del acuerdo sin que se haya adoptado la medida cautelar de suspensión. La dificultad radica en que el acuerdo de mediación elevado a escritura pública recibe el mismo tratamiento en el proceso de ejecución que una sentencia judicial firme. De esta forma el legislador regula la oposición al título ejecutivo que sea una resolución judicial o arbitral o un acuerdo de mediación en el artículo 556 LEC. En este precepto se limitan las causas de oposición que se puede alegar al pago o cumplimiento de lo ordenado, la caducidad de la acción ejecutiva o los pactos o transacciones que se hubieran convenido para evitar la ejecución, siempre que consten en escritura pública.

La cuestión que se plantea es si se puede alegar también la existencia de cláusulas abusivas o que el acuerdo de mediación es nulo de pleno derecho por ser contrario al orden público nacional o comunitario. Si realizamos una interpretación literal de la ley la respuesta debe ser negativa ya que el legislador ha optado por asimilar el acuerdo de mediación a una resolución judicial, por lo que no se aplica el artículo 557 LEC, que regula las causas de oposición fundada en títulos no judiciales ni arbitrales ni el artículo,

ni el artículo 552.1.2 LEC, que prevé el examen de oficio si alguna de las cláusulas incluidas en el título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 LEC puede ser calificada como abusiva.

La regulación legal tiene su origen en el intento del legislador de potenciar la mediación asimilándolo a un título judicial. El error que comete es que es una alternativa a la jurisdicción y no un equivalente jurisdiccional, como lo es el arbitraje. Es decir, parece impedir que el órgano judicial pueda analizar la adecuación al orden público, sin tener en cuenta que en una resolución judicial ha existido una valoración previa del órgano jurisdiccional y en el acuerdo de mediación ésta no se produce, salvo que se apruebe judicialmente en el caso de la mediación intrajudicial.

La solución desde el punto de vista del ordenamiento comunitario es la contraria. El principio de efectividad de la normativa comunitaria obliga a que el Tribunal analice de oficio la existencia de cláusulas abusivas. El TJUE se ha pronunciado de forma constante sobre la obligación del juez nacional de apreciar de oficio en el momento de admitir a trámite la demanda la existencia de cláusulas abusivas, debiendo comunicar previamente a las partes las causa por las que considera que tiene este carácter y dándoles la oportunidad de formular alegaciones⁶.

El TJUE se pronunció en el asunto *Asturcom*, C-40/08, de 6 de octubre de 2009, sobre el análisis de oficio de un laudo arbitral al inicio del proceso de ejecución. En el párrafo 53 concluye que “en la medida en que el juez nacional que conozca de una demanda de ejecución forzosa de un laudo arbitral firme deba, con arreglo a las normas procesales internas, apreciar de oficio la contrariedad de una cláusula arbitral con las normas nacionales de orden público, está igualmente obligado a apreciar de oficio el carácter abusivo de dicha cláusula desde el punto de vista del artículo 6 de la citada Directiva, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello”.

Esta interpretación la reitera posteriormente en el auto de 16 de enero de 2010, asunto *Photovost*, C-76/10. En el párrafo 51 de este auto el TJUE vuelve a recordar que el Tribunal que conozca de una demanda de ejecución forzosa de un laudo arbitral debe apreciar de oficio la contrariedad de una cláusula arbitral con las normas nacionales de orden público.

Por ello considero que el Tribunal debe analizar de oficio al dictar el auto con la orden general de ejecución la adecuación a la normativa protectora del consumidor que tiene carácter imperativo e integra el orden público comunitario, debiendo conceder audiencia a las partes sobre la supuesta vulneración y los efectos de este. Si no lo realiza el

---

⁶ Ver ampliamente el análisis que realizo en *La protección procesal...*, cit., pp. 64 y ss.

ejecutado debe tener la oportunidad de alegarlo como causa de oposición. Es cierto que el legislador no lo ha previsto así al asimilar el acuerdo de mediación a las resoluciones judiciales, pero la primacía del derecho comunitario implica que deba permitirse aplicando la interpretación que ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A esta conclusión tengo que realizar dos aclaraciones. La primera es que el análisis de oficio se limita a aquellos aspectos de la normativa comunitaria que integre el orden público comunitario, y no a otros que se excluyen del mismo. Y el órgano judicial encargado de declarar su contenido es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La segunda es que si el Tribunal no realiza el análisis de oficio o permite que el ejecutado lo pueda alegar estará infringiendo el artículo 24 de la Constitución Española. El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 241/2015, de 5 de noviembre, afirma en el fundamento de derecho quinto que “si corresponde a este Tribunal velar por el respeto del principio de primacía del derecho de la Unión cuando... ya exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En estos casos, el desconocimiento y preterición de esta norma de Derecho de la Unión, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, puede suponer una selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso, lo cual puede dar lugar a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 145/2012, de 2 de julio)”⁷.

3. LA RELACIÓN ENTRE LA MEDIACIÓN DE CONSUMO Y EL PROCESO JUDICIAL

En este apartado me centraré en la relación entre la mediación de consumo y el proceso judicial.

3.1. Las materias que deben ser objeto de regulación

Tal como expuse al analizar la ley 5/2012, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles⁸, el ámbito que debe ser regulado es:

- Cómo de denuncia en el proceso el no haber acudido al adr practado y los efectos.

---

⁷ Tal como he expuesto las Sentencias del TJUE de 6 de octubre de 2009, Asturcom, C-40/08, y de 16 de enero de 2010, Photovos, C-76/10 obliga al tribunal nacional a apreciar de oficio la vulneración del orden público comunitario del laudo arbitral cuya ejecución se ha solicitado. En el caso en que el órgano jurisdiccional entienda que no debe realizarlo tendría que plantear una nueva cuestión prejudicial para que el TJUE volviera a pronunciarse sobre la aplicación de esta doctrina a la vista de las argumentaciones que se planteen en defensa de la no obligación del tribunal estatal de analizar de oficio el carácter contrario al orden público de un laudo arbitral.

⁸ PEREZ DAUDI, “la relación entre la mediación en asuntos civiles y mercantiles y el proceso civil”, en *Revista de Derecho Mercantil*, 2012-1, pp. 232 y ss.

- La relación entre la mediación y las medidas cautelares y actividades previas al inicio del proceso.
- La impugnación del acuerdo de mediación.

El legislador en la Ley 5/2012 , de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, lo realiza de una forma parcial. Así prevé la adopción de medidas cautelares, la impugnación del acuerdo de mediación a través de un proceso declarativo, la ejecución de un acuerdo de mediación asimilándolo a una resolución judicial y el mecanismo procesal para denunciar en el proceso la existencia de un acuerdo de mediación. En mi opinión la regulación que realiza es muy deficiente.

Esta conclusión se ve avalada por el informe que el Consejo General del Poder Judicial realizó al anteproyecto de ley de resolución alternativa de conflictos de consumo, que afirmaba “la carencia en nuestro ordenamiento de un tratamiento sistemático de la mediación como procedimiento general de resolución de conflictos en el ámbito civil y mercantil, sólo parcialmente colmado por la promulgación de la ley 5/2012”⁹. El Consejo también afirma en su informe que “la regulación legal de los sistemas alternativos de conflictos está llamada a ser especialmente útil en todos los aspectos relacionados con la conexión entre arbitraje, mediación y proceso judicial”.

La ley 7/2017 pretende regular los mecanismos de resolución alternativa de conflictos en el ámbito de consumo, pero desde la relación con el proceso judicial se limita a derogar el artículo 2 de ley 5/2012, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, que excluía su aplicación a la mediación de consumo¹⁰, y dar nueva redacción al artículo 63.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la declinatoria como medio procesal para denunciar la existencia de un acuerdo de acudir a mediación, excepto si el el pacto previo es entre un consumidor y un empresario de someterse a un procedimiento de resolución alternativa de litigios de consumo y el consumidor sea el demandante.

---

⁹ CGPJ, informe al proyecto de ley de resolución alternativa de resolución de conflictos de consumo, aprobado por el acuerdo adoptado por el pleno del CGPJ en la reunión de 11 de junio de 2015, página 13.

¹⁰ Este es uno de los aspectos que advirtió el Consejo General del Poder Judicial en el informe que emitió (página 14 del informe ya citado en la nota anterior) al anteproyecto de ley. La incorporación a la ley se produjo por la aprobación de la enmienda número 90 que presentó el PSOE en el Congreso al proyecto de ley que remitió el Gobierno. La motivación de la enmienda era “establecer el principio de aplicación preferente de la normativa especial para la mediación de consumo y, con carácter supletorio, la de la Ley de Mediación para las cuestiones no reguladas de forma especial por la normativa de resolución alternativa de litigios de consumo. Tal posición ha sido corroborada por el consejo General del Poder Judicial en su informe al Anteproyecto de Ley de Resolución alternativa de litigios de consumo “.

A continuación, analizaré la denuncia procesal de la existencia de un acuerdo de acudir a un ADR, remitiéndome al apartado anterior para el desarrollo de la impugnación del acuerdo de mediación.

3.2. la denuncia procesal de la existencia de un acuerdo de acudir a un adr

La disposición final cuarta de la Ley 7/2017 modifica el artículo 63.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado en los siguientes términos:

“Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en el juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores, excepto en los supuestos en que exista un pacto previo entre un consumidor y un empresario de someterse a un procedimiento de resolución alternativa de litigios de consumo y el consumidor sea el demandante”.

El origen de esta redacción es el tratamiento de equivalente jurisdiccional que dio la ley 5/2012 a la mediación. La disposición final 3.3. de la Ley 5/2012 redactó el artículo 63.1 LEC del siguiente modo:

“Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en el juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores”.

En su momento critiqué esta opción legislativa ya que desde el punto de vista de la naturaleza jurídica es un error, pero lo que se pretendía era potenciar la mediación¹¹. En mi opinión el no haber acudido a un procedimiento de mediación antes de iniciar el proceso judicial no puede determinar la inadmisión de la demanda debiendo permitirse la subsanación. Una cosa es que se fomente el uso de un método alternativo de resolución de conflictos y otra que se sancione con el no inicio del proceso con las graves consecuencias que puede tener para el cómputo de los plazos de prescripción y caducidad. Además, no se puede obligar al demandante a acudir a una institución que tiene por naturaleza carácter voluntario ya que ello implica convertirla en un trámite inútil y meramente dilatorio. Tal como advierte el Consejo General del Poder Judicial en su

---

¹¹ En “la relación entre la mediación...”, loc. cit.

informe al anteproyecto de ley “no parece que tenga mucho sentido instaurar supuestos de mediación obligatoria cuando el propio legislador presume que se van a convertir en meros trámites previos sin una verdadera efectividad, pues lo único que ello supondrá es la agregación de nuevas cargas llamadas a lastrar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia”¹².

Previamente el informe del Consejo General del Poder Judicial manifiesta que el legislador es consciente que será un trámite ineficaz para resolver el acuerdo al prever en el artículo 19.1 del Anteproyecto que “en los supuestos de mediación obligatoria las sesiones informativas serán gratuitas. En tal caso, se podrá tener por intentada la mediación y cumplida la obligación legal justificando la asistencia”¹³ y en el artículo 24 inciso tercero del anteproyecto que “la mediación exigida por la ley se tendrá por intentada mediante la aportación del acta en que la que conste la inasistencia de cualquiera de las partes”¹⁴.

Es decir, desde un punto de vista práctico nos encontraremos ante un trámite adicional que carecerá de eficacia similar a la regulación de la conciliación previa de la LEC de 1881 que motivó que el legislador de la ley 34/1984 la convirtiera en voluntaria.

La reforma que realiza la ley 7/2017 al redactado de este artículo es excluir la aplicación de este a los casos en que el consumidor sea el demandante y exista un pacto previo entre un consumidor y un empresario de someterse a un procedimiento de resolución alternativa de litigios de consumo. Es decir, cuando un consumidor y un empresario acuerden acudir a un ADR éste será obligatorio para uno, el empresario, pero no para el otro, el consumidor. Este tratamiento diferente hubiera precisado de una explicación, pero la exposición de motivos no hace referencia alguna a esta modificación de la LEC.

En el texto remitido por el Gobierno al Congreso no se realizaba esta modificación de la LEC. Su incorporación se debe a la aprobación de la enmienda número 90 del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, que fue aprobada por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, actuando con comisión legislativa plena, con 17 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones. La motivación fue que “en coherencia con la enmienda al artículo 13, ya que el consumidor no está vinculado por los pactos previos de sometimiento a un procedimiento de resolución alternativa de litigios en materia de

---

¹² Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, 2010, pp. 152 de la versión electrónica.

¹³ El carácter gratuito de la sesión informativa cuando la mediación sea obligatoria está previsto en el artículo 18.3 del Proyecto de Ley.

¹⁴ Este precepto se convirtió en el artículo 18 del Proyecto de Ley.

consumo, se trata de excluir que un pacto de mediación de consumo sirva como motivo para que prospere la declinatoria cuando el consumidor sea el demandante”.

La enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso al artículo 13 fue la número 48, que fue aprobada por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales actuando con competencia legislativa plena el 12 de julio de 2017 con 17 votos a favor, 14 votos en contra y 6 abstenciones. El resultado es el actual artículo 13 de la ley 7/2017, que limita la vinculación del consumidor a los acuerdos de sumisión a un procedimiento con resultado no vinculante cuando se haya realizado antes del surgimiento del litigio.

La motivación que se presentó era:

“La redacción actual del artículo 13 del Proyecto resulta fiel al artículo 10 de la Directiva, el cual no pone reparo al carácter vinculante de los pactos, celebrados antes del surgimiento del litigio, mediante los cuales las partes someten la resolución de litigios a un procedimiento de mediación. Sin embargo, el Derecho europeo no impide a los Estados miembros que eleven la protección del consumidor, pues el artículo 2.3 de la Directiva indica que los Estados miembros podrán mantener o introducir normas que vayan más allá de lo dispuesto en la presente Directiva. En aras de conseguir una mejor protección del consumidor resulta aconsejable liberarlo de la obligación de pasar por un procedimiento de mediación, acordado en una cláusula propuesta por el empresario, como paso previo para acudir a la vía judicial”.

La defectuosa técnica legislativa utilizada por el legislador al dar una nueva redacción al artículo 63.1 LEC implica que según como se interprete este precepto cuando el consumidor sea el demandante el empresario demandado no pueda hacer valer un acuerdo de someterse a un mecanismo alternativo de resolución de conflictos pactado con posterioridad a que haya surgido el conflicto.

Una opción interpretativa es considerar que el “pacto previo” al que hace referencia el artículo es a la interposición del proceso judicial. Ésta implicaría una vulneración del derecho a la igualdad de las partes ya que se trata de forma distinta al empresario y al consumidor cuando se hubieran sometido a un procedimiento con resultado no vinculante una vez que ha surgido el conflicto. Cuando se ha pactado con anterioridad la previsión legislativa está justificada en el artículo 13 de la ley que limita la vinculación del consumidor, por lo que no se puede alegar por el empresario que no ha acudido al sistema de resolución de conflictos con resultado no vinculante. Sin embargo, cuando se ha pactado una vez que ha surgido el conflicto ambas partes están obligadas a intentarlo. Por ello el empresario debería tener la posibilidad de denunciar, en las

mismas condiciones que el consumidor, el no haber acudido a esta opción. Con el agravante de que no tendrá otro medio para alegarlo.

Los órganos jurisdiccionales tienen dos opciones. Una es plantear una cuestión de inconstitucionalidad por vulneración de los artículos artículo 14 y 24 de la Constitución. Sin embargo, hasta ahora no se ha interpuesto.

La segunda es acudir a la vía interpretativa para acomodar la norma al ordenamiento constitucional, tal como prevé el artículo 5.3 LOPJ. En este caso el órgano jurisdiccional debería vincular el redactado actual del artículo 63.1 LEC con el artículo 13 de la ley 7/2017, que es precisamente la motivación de la enmienda que da nuevo redactado al artículo 63.1 LEC. La conclusión para adecuarlo al derecho de igualdad de las partes procesales y el derecho a la tutela judicial efectiva es que la expresión “pacto previo” es al conflicto y no al proceso judicial. Además de ser la más razonable porque el acuerdo siempre será previo a la interposición de la demanda, ya que en caso contrario no hay acuerdo que pueda hacerse valer judicialmente, es la que se adecúa a la motivación de la modificación del artículo 63.1 LEC y a la interpretación constitucional.

3.3. Los adr y las actividades previas al proceso judicial

La forma normal de iniciar un proceso judicial es por demanda, pero existen supuestos en los que se pueden realizar actos procesales previo. La LEC prevé que se puede practicar la prueba anticipada, solicitar diligencias preliminares para la preparación del proceso judicial (arts. 256 y ss. LEC) o medidas cautelares (art. 730 LEC). Cuando se realice el actor tiene la obligación de presentar la demanda en el plazo de un mes a partir de la terminación de las diligencias preliminares (art. 256.3 LEC) o de 20 días desde la adopción de la medida cautelar (art. 730.2 LEC).

De nuevo debemos distinguir en función del adr que se vaya a iniciar. Si es un ADR vinculante, que en el caso de España sería el arbitraje de consumo, el inicio de este se asimila a la presentación de la demanda judicial. Por ello no debe generarse ningún problema en el cumplimiento del plazo.

La dificultad surge en los ADR no vinculantes, como la mediación y la conciliación. La cuestión se resuelve con la previsión del artículo 4.1 de la ley 7/2017:

“La presentación de una reclamación ante una entidad acreditada suspenderá o interrumpirá los plazos de caducidad y de prescripción de acciones conforme a lo establecido en la normativa que resulte de aplicación en cada caso”.

La cuestión que se suscita es si el plazo legal de un mes y de 20 días para presentar la demanda cuando se hayan practicado diligencias preliminares (artículo 256.3 LEC) o adoptado medidas cautelares (artículo 730.2 LEC), respectivamente, se suspende por la

aplicación del artículo 4.1 de la Ley 7/2017. GIL NIEVAS afirma que “los plazos para el ejercicio de una acción normalmente son plazos de prescripción (aunque en algunos supuestos lo son de caducidad) y los plazos, una vez en el proceso para el ejercicio de los distintos actos procesales, lo son siempre de caducidad”¹⁵. Del mismo modo se han pronunciado GASCON INCHAUSTI al afirmar que “se trata, sin lugar a duda, de un plazo de caducidad, y no de prescripción”¹⁶ y BARONA VILAR¹⁷. En este mismo sentido ya se ha pronunciado la jurisprudencia de forma reiterada, como la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1988 (RJ 1988\9810) que afirma expresamente que “todos los términos procesales lo son de caducidad y no de prescripción, y cuyo carácter preclusivo legalmente impuesto por el artículo 306 de la Ley Procesal”¹⁸.

La solución debería venir determinada por la naturaleza del acto previo. En relación con las diligencias preliminares o de comprobación de hechos nada impide que se suspenda el plazo para presentar la demanda si se inicia el procedimiento de mediación. Esta institución tiene como finalidad la preparación del proceso, por lo que no se ha alterado la situación fáctica preexistente y lo único que se ha realizado es permitir que el demandado pueda preparar el proceso de una forma más adecuada y evite una sentencia absolutoria por desconocer alguno de los elementos.

En el caso de que se hayan adoptado unas medidas cautelares la situación es más compleja. Cuando las mismas se solicitan con carácter previo al inicio del proceso y se adoptan se corre el riesgo de que se utilicen de forma abusiva. Para evitarlo se exige por el legislador que se inicie el proceso judicial en un breve plazo de tiempo. Entiendo que acudir a una mediación cuando ya se han adoptado unas medidas cautelares implica alterar la igualdad de las partes. Cuando se adoptan las medidas cautelares el Tribunal

---

¹⁵ GIL NIEVAS, en “La directiva de mediación en la Comunidad Europea”, en *Métodos alternativos de solución de conflictos: perspectiva multidisciplinar*, 2006, p. 54.

¹⁶ GASCON INCHAUSTI, en *La adopción de las medidas cautelares con carácter previo a la demanda*, edit. Cedecs, Madrid, 1998, capítulo “cuestiones que plantea la petición de una medida cautelar ante demandam (III): la incoación del proceso principal con carácter urgente”, página 2 de la versión electrónica (referencia Vlex <http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/cautelar-demandam-incoacion-urgente-205560>).

¹⁷ BARONA VILAR, en *Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España tras la aprobación de la ley 5/2012, de 5 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles*, epígrafe 7 sobre los efectos de la mediación sobre el transcurso de los plazos, referencia Tirant On Line TOL3.022.617, p. 2.

¹⁸ Del mismo modo la Sentencia de la Sala de lo Civil del TS 657/2011, de 21 de septiembre (RJ 2011\6577). Referido a las medidas cautelares previas, si bien a la regulación del embargo preventivo de la LEC de 1881, se pronuncia el Auto de la sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de octubre de 2011 (JUR 2002\10942), afirmando en su fundamento jurídico tercero que “el art. 1411-2 de la L.E.C. regula el tratamiento procesal del incumplimiento del requisito de interposición de la demanda principal dentro del plazo de caducidad referido”.

analiza la concurrencia del *fumus boni iuris*, lo que implica analizar el objeto del proceso y formarse una decisión sobre el mismo. Una vez realizado la parte actora verá reforzadas su posición ante la decisión del Tribunal que acuerda la medida cautelar porque entiende que la demanda debería ser estimada desde un punto de vista judicial. Por ello es contradictorio que se acuda a este sistema en este caso cuando ya se ha judicializado el conflicto obligando a que el órgano jurisdiccional decida sobre la cuestión de fondo al pronunciarse sobre el “*fumus boni iuris*”. Como excepción debo recordar que puede ser que el procedimiento de ADR no vinculante se haya tenido que iniciar porque exista un pacto de sometimiento al procedimiento de mediación o porque el afectado por la medida cautelar inste su inicio.

Consecuentemente la solicitud de inicio del procedimiento de mediación suspenderá el cómputo del plazo para presentar la demanda desde la fecha en la que conste el inicio del ADR no vinculante, que se reanudará cuando finalice el procedimiento. Como es obvio el objeto del procedimiento de ADR debe ser la pretensión asegurada a través de la adopción de la medida cautelar y deberá ser notificado al Tribunal que ha adoptado la medida cautelar para que no se alcen automáticamente por no iniciar el proceso judicial. Una vez finalice las consecuencias serán distintas dependiendo de si se llega o no a un acuerdo y éste es total o parcial.

3.4. El inicio de un adr y el proceso judicial pendiente

El artículo 4.2 de la ley 7/2017 prevé que “cuando de manera voluntaria se inicie ante una entidad acreditada un procedimiento de resolución alternativa con resultado no vinculante, estando en curso un proceso judicial, las partes, de común acuerdo, podrán solicitar su suspensión de conformidad con la legislación procesal”.

Esta previsión es similar a la reforma que realizó del artículo 19. de la LEC la disposición final tercera apartado 1 # de la ley 5/2012. Relacionándolo con el apartado 4 del artículo 19 LEC se permite que las partes pidan la suspensión del proceso. Desde esta perspectiva este precepto era innecesario técnicamente, pero recuerda que se puede realizar.

Una cuestión que se plantea y que no está resuelta en la ley 7/2017 es la posibilidad de solicitar medidas cautelares cuando se está tramitando un adr, vinculante o no. Ante la laguna legal hay que acudir a la legislación general que regula el arbitraje, la conciliación y la mediación.

En el caso del arbitraje de consumo, que sería un ADR vinculante siguiendo la terminología legal, la legislación supletoria es la regulación que realiza la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, tal como prevé la disposición adicional primera. La aprobación de la Ley 60/2003 puso fin a una controversia judicial sobre la posibilidad de

adoptar medidas cautelares para asegurar la eficacia de un arbitraje y la competencia. En los artículos 8, 11 y 23 prevé que se podrá solicitar la adopción de medidas cautelares bien ante el Juez o el árbitro¹⁹. Por lo tanto, las partes podrán solicitarlas, teniendo la opción de realizarlo ante el órgano jurisdiccional o ante el árbitro.

En el caso de los procedimientos de ADR no vinculantes en la legislación de consumo tampoco se realiza ninguna previsión, lo que nos obliga a acudir a la legislación supletoria. En el caso de la mediación de consumo es la ley 5/2012, de mediación en el ámbito civil y mercantil. La supresión del párrafo d del apartado 2.2 de la ley 5/2012 que realiza la disposición final 17ª de la ley 17/2017, que excluía su aplicación a la mediación de consumo, la convierte en supletoria.

La ley 5/2012, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, regula en el artículo 10.2, inciso tercero la posibilidad de adoptar “medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para la evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos” durante el tiempo que se desarrolle la mediación.

Consecuentemente será posible la adopción de medidas cautelares durante la tramitación de la mediación de consumo. Éstas deberán solicitarse al juez competente y acreditar la concurrencia de los presupuestos de adopción de estas, que son el *fumus boni iuris*, el *Periculum in mora* y el ofrecimiento de caución²⁰. Otra opción es que en el procedimiento de mediación se realicen acuerdos parciales que tengan como finalidad asegurar la eficacia de su resultado.

El otro ADR con resultado no vinculante previsto en la legislación procesal española es la conciliación, que está regulada en los artículos 139 y ss. de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria y no realiza previsión alguna. Sin embargo, el artículo 8 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria prevé que las disposiciones de LEC serán de aplicación supletoria de los expedientes de jurisdicción voluntaria en todo lo no regulado por la presente ley. Por ello, a nivel teórico se puede defender la posibilidad de adoptar medidas cautelares para asegurar la efectividad de un expediente de conciliación.

La conclusión anterior debe ser matizada:

- En primer lugar, la conciliación no es un expediente de jurisdicción voluntaria, sino un método de heterotutela de resolución alternativa de litigios.

- En segundo lugar, que el artículo 143 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria prevé que la presentación con ulterior admisión de la solicitud de conciliación

---

¹⁹ Ver ampliamente el análisis que realiza MALLANDRICH MIRET, en *Medidas cautelares y arbitraje*, edit. Atelier, Barcelona, 2010.

²⁰ Sobre las dificultades de su acreditación en este caso ver el análisis que hice en “la relación entre las medidas cautelares y la mediación civil y mercantil”, en *Justicia*, 2013-2, pp. 311 y ss.

interrumpirá la prescripción adquisitiva y extintiva, pero no incluye los plazos de caducidad. Por ello solo si fuera directamente aplicable el artículo 4 de la ley 7/2017²¹, también se extenderían a éstos.

- En tercer lugar, por la dificultad de que el promotor de la conciliación solicite una medida cautelar para asegurar su efectividad cuando el retraso en el inicio del proceso judicial se debe a su opción por este ADR y no por otros sistemas como el arbitraje o la mediación, que tal como hemos analizado sí que lo permiten.

4. BIBLIOGRAFÍA

BARONA VILAR, Silvia. *Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España tras la aprobación de la ley 5/2012, de 5 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles*, epígrafe 7 sobre los efectos de la mediación sobre el transcurso de los plazos, referencia Tirant On Line TOL3.022.617.

CGPJ, informe al proyecto de ley de resolución alternativa de resolución de conflictos de consumo, aprobado por el acuerdo adoptado por el pleno del CGPJ en la reunión de 11 de junio de 2015,

FRANCO ARIAS, Just. "artículo 44 y 45: la ejecución del laudo y particularmente la ejecución provisional según la nueva ley de arbitraje del 2003", en *Anuario de Justicia Alternativa*, número 5/2004, febrero 2004

GASCON INCHAUSTI, Fernando. *La adopción de las medidas cautelares con carácter previo a la demanda*, edit. Cedecs, Madrid, 1998, capítulo "cuestiones que plantea la petición de una medida cautelar ante demandam (III): la incoación del proceso principal con carácter urgente" (referencia Vlex <http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/cautelar-demandam-incoacion-urgente-205560>).

GIL NIEVAS, Rafael. "La directiva de mediación en la Comunidad Europea", en *Métodos alternativos de solución de conflictos: perspectiva multidisciplinar*, 2006

MALLANDRICH MIRET, Nuria. *Medidas cautelares y arbitraje*, edit. Atelier, Barcelona, 2010.

PARDO IRANZO, Virginia, "Valoración crítica de la reforma del proceso de ejecución del laudo arbitral", en *Revista General de Derecho Procesal*, 26, 2012.

PÉREZ DAUDÍ, Vicente. "la relación entre la mediación en asuntos civiles y mercantiles y el proceso civil", en *Revista de Derecho Mercantil*, 2012-1, pp. 232 y ss.

---

²¹ En mi opinión se plantearía en el caso en el que la entidad acreditada incluyera entre sus procedimientos de resolución alternativa con resultado no vinculante la conciliación.

PÉREZ DAUDÍ, Vicente. “La relación entre las medidas cautelares y la mediación civil y mercantil”, en *Justicia*, 2013-2, pp. 311 y ss

PÉREZ DAUDÍ, Vicente. *La protección procesal del consumidor y el orden público comunitario*, editorial Atelier, Barcelona, 2018.

RIPOLL CARULLA, Santiago. “la suspensión del laudo: estudio del artículo 45 LA, en *Justicia*, 2013-1, pp. 373 y ss).

VILALTA NICUESA, Esther. “las reclamaciones de consumo y el Sistema de mediación institucional (análisis del Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre el procedimiento de mediación en las relaciones de consumo, a la luz de la normativa comunitaria y estatal)”, en *InDret*, 4/2014, versión digital.